

editorial

Tendencias suicidas

Para un país, la ineficiencia es siempre un defecto a deplorar, por lo general gravoso en términos de prosperidad desperdiciada, y nivel de vida perdido. Puede ser algo peor. Llegada a cierto nivel, y comprometiendo sectores vitales de la economía, la ineficiencia puede transformarse en la encarnación de impulsos autodestructivos. Es lo que tememos que esté ocurriendo en nuestro país.

Los países también tienen su forma de suicidarse. La historia nos los muestra una y otra vez tomando por derroteros que fatalmente deben precipitarlos en una catástrofe. Y luego prosiguiendo por ellos como si hubieran perdido la capacidad de reacción, como si el abismo que se abre ante sus pies permaneciera invisible. Los griegos acuñaron al respecto una frase clásica: los dioses, decían, ciegan a quienes quieren perder.

Al Uruguay le vemos avanzar hacia el precipicio como si fuera un robot programado para despeñarse. Su clara vocación a desarrollar el sector financiero la vemos frustrada por el colapso de las comunicaciones. La tendencia mundial a la computadorización de empresas y hogares, entorpecida por la inusitada frecuencia de los cortes de energía. Al rubro número uno de las exportaciones, el turismo, lo vemos crucificado por el colapso de las comunicaciones y los cortes de energía, aquí y allá apoyados en su destructivo influjo por la insuficiencia del servicio de agua corriente y la contaminación ambiental. A todas las demás exportaciones las vemos acosadas por la ineficiencia portuaria. A la agricultura y a la industria, las vemos rehenes de los monopolios estatales. Y al país en conjunto, incapaz de adoptar ninguna medida eficaz para evitar la calamidad a la que todo ello irremisiblemente nos va aproximando.

En medios empresariales, profesionales, y aun políticos, el nivel de percepción del mal no es desdeñable, pero aun mayor es el grado de su resignación ante lo que parecen considerar ineluctable. Llegan a captar que una brecha de anchura creciente, primordialmente tecnológica y económica, pero que progresivamente va abarcando todos los aspectos de la cultura, nos separa de los países de mayor desarrollo, muy cerca de los cuales hace unas cuantas décadas nos movíamos —incluso por delante de más de uno que hoy se destaca dentro del pelotón de avanzada— pero no creen que haya nada que hacer al respecto. Diríase que a nosotros los dioses, para perdernos, no es que nos hayan enturbiado la visión, sino que nos han enfermado la voluntad, y matado la imaginación.

Ese fatalismo generalizado es tal vez lo que pueda explicar la debilidad del liderazgo gubernamental al respecto. El Presidente de la República habla de modernización, pero luego se abstiene de infundir con-

creción a su propuesta. O, si se prefiere, la concreción que finalmente le otorga se parece a aquel famoso parto de los montes, que sólo dio a luz una diminuta laucha. En materia de iniciativas enviadas al Parlamento, el alumbramiento fue de dos ratoncitos entecos, demasiado débiles para escapar de las carpetas y abrirse paso hasta la sala de sesiones, a fin de exigir un pronunciamiento sobre si su vida debería o no continuar hasta la madurez ratonil. Tratábase apenas de la línea aérea y de la pescadería estatales. No se rozaba ninguno de los grandes problemas planteados por la ineficiencia del sector público. Los monopolios seguían tan campantes. Ni el turismo, ni las demás exportaciones, ni la agricultura, ni la industria, ni los servicios, obtenían el más ligero respiro frente a la opresión estatal que los agobia. Como iniciativas de modernización, no habría sido posible menos. Pero ni siquiera lo trivial e insignificante logró abrirse paso a través de la oposición erigida por los intereses creados. Y eso que ésta no hizo más que flexionar los músculos, y mostrar su afilada dentadura.

La confrontación luce que va a resultar más interesante a propósito del tramo ferroviario de la campaña modernizadora del gobierno, respecto del cual las circunstancias institucionales le permitieron tomar un atajo que no pasaba por el Parlamento. Desgraciadamente, esta otra iniciativa, que tampoco toca ninguno de los principales problemas que el sector público determina para el país —aunque sí es importante desde el punto de vista presupuestal— ha sido planteada con notables defectos de forma —total falta de publicidad y total falta de oportunidades para el debate público— lo que otorga al lobby del statu quo algunos argumentos dignos de consideración. Pero los que vale la pena examinar en este contexto son los argumentos de alcance general que el lobby se muestra dispuesto a arrojar contra cualquier propuesta modernizadora que ose asomar la cabeza por encima de la trinchera.

Las fuentes que aportan información sobre los argumentos del lobby anti-modernización son sumamente variadas, y ello sin duda a causa de que este grupo de presión es sumamente heterogéneo en cuanto a su conformación sociopolítica, si bien bastante homogéneo desde el punto de vista intelectual. Principalmente esas fuentes son: declaraciones del PIT-CNT, de sindicatos del sector público, especialmente de los afectados por las iniciativas, y de sus dirigentes, declaraciones de legisladores del Partido Nacional y del Frente Amplio, y memorandos dirigidos al Senado por los directorios del Banco de Seguros del Estado y de ANCAP, ante sendos proyectos desmonopolizadores del Senador Luis Alberto Lacalle. Sustancialmente, los argumentos son los siguientes:

- En primer lugar, la soberanía está en juego. Privatización significa extranjerización. Desmonopolización implica privatización, por ende también afecta la soberanía. Si las iniciativas prosperan, serán extranjeros quienes aseguren nuestros riesgos, quienes nos transporten podrán serlo, beberemos alcohol foráneo, etc. Obsérvese la absoluta generalidad de hincarle el diente a la ineficiencia del sector público sin chocar contra ese hueso. Sin lugar a dudas, el lobby cifra en las connotaciones emocionales de la palabra "soberanía" sus mejores esperanzas.

- En segundo lugar, completando el poder intimidatorio de su presión, el lobby se apresta a sostener que, puesto que donde el Estado se retira hay normalmente intereses privados que avanzan, la defensa de los proyectos modernizadores debe suponerse alentada y financiada por esos intereses. Puesto que ya vimos que ellos están invariablemente sospechados de ser extranjeros, la conexión entre este argumento y el anterior es manifiesta.

- En tercer y último lugar, se trata de hacer una lista de costos. Como es obvio, todos los proyectos, los buenos y los malos, tienen costos. Lo que pasa es que también tienen beneficios, y los buenos se caracterizan porque sus beneficios son mayores que aquéllos. El lobby se propone concentrarse en los costos, y confiar en que el público no se dará cuenta de que los beneficios existen y son obviamente mayores; particularmente, si los defensores de los proyectos han sido reducidos al silencio por la intimidación derivada de los dos primeros argumentos.

Será cuestión de ver si esta argumentación hace camino, o recibe del público el tratamiento que merece. Será cuestión de ver si las medidas de acción gremial que están apuntalando, y seguirán apuntalando, los argumentos, serán capaces de suplir el poder intimidatorio que a aquéllos pudiera faltarles. Será cuestión de ver si la Administración presta a sus propias iniciativas el grado de apoyo y entusiasmo que todavía les ha retaceado. Y si es capaz de generar aún las iniciativas de significación en este terreno que podrían obviar su de otro modo tremenda responsabilidad. Y, finalmente, si dentro y fuera del partido de gobierno hay líderes políticos que están dispuestos a identificarse con la bandera del cambio hacia la eficiencia y la modernidad. Todo esto nos permitirá muy pronto saber si en el Uruguay la voluntad de vida es o no superior a las tendencias suicidas que, con fuerza nada despreciable, pugnan por destruirle.